

PREGUNTAS ESCRITAS – VISITA COMISIÓN

INFORME DE ESTADO DE DERECHO 2024

Anti-corruption:

9. (In writing) According to OECD latest report (2022), there is lack of clarity on adequate funding of enforcement bodies, recommending taking necessary steps to more proactively detect and enforce anti-bribery legislation, including foreign bribery:

- a. is there any legislative plan in this regard?
- b. Are you considering taking further actions to better address the phenomenon?
- c. Also with respect to prosecution and enforcement?

España sigue comprometida en la persecución de la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, como se desprende del informe en fase 4 sobre la aplicación por parte de España del Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de diciembre de 2022, citado en la pregunta.

En este informe se reconocen las múltiples actuaciones desarrolladas desde la anterior fase 3, incluida la actualización del marco normativo, citándose la reforma del Código Penal de 2015 o la más reciente ley en materia de protección de informantes, entre otras; además de logros y buenas prácticas desarrolladas en materia de detección y persecución del delito, proactividad en la cooperación jurídica internacional...

De acuerdo con el calendario definido por el grupo de trabajo de la OCDE responsable de la aplicación de este Convenio, será en marzo de 2025 cuando España deba informar al mismo sobre el seguimiento dado a las recomendaciones formuladas en el informe de 2022.

Por otro lado, cabe recordar que, durante la pasada presidencia española del Consejo de la UE, España impulsó muy activamente la negociación de la propuesta de directiva sobre la lucha contra la corrupción. De acuerdo con la información facilitada por la actual presidencia rotatoria belga, su previsión es poder alcanzar la orientación general sobre esta propuesta en el Consejo JAI del próximo mes de junio. Seguidamente, una vez se logre el acuerdo definitivo entre las instituciones sobre el texto, los Estados miembros de la UE deberán transponer la directiva a sus respectivos ordenamientos nacionales, para asegurar la plena compatibilidad de estos con aquella, por lo que anticipar en estos momentos reformas legislativas adicionales puede resultar precipitado, sin perjuicio de que se impulsen otras ya anunciadas, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.